



RED POR UNA AMÉRICA LATINA
LIBRE DE TRANSGÉNICOS

BOLETÍN N° 825

BRASIL NECESITA MÁS REGULACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS

El informe de Anvisa trae información preocupante sobre los alimentos comprados y consumidos por la población brasileña

Maria Laura Canineu - 21 diciembre 2019

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) publicó el 11 de diciembre un informe con información preocupante sobre los alimentos comprados y consumidos todos los días por la población brasileña.

Los técnicos de Anvisa recolectaron más de 4.600 muestras de alimentos de supermercados en casi todos los estados brasileños entre agosto de 2017 y junio de 2018 (solo el estado de Paraná decidió no participar en el estudio). Probaron 14 alimentos populares entre los brasileños: piña, lechuga, arroz, ajo, papas, remolacha, zanahorias, chayote, guayaba, naranja, mango, pimientos, tomates y uvas.

Se encontró que casi una cuarta parte de las muestras analizadas eran insatisfactorias, es decir, contenían residuos de pesticidas que excedían los niveles permitidos, o que no estaban autorizados para ese cultivo, o que incluso estaban prohibidos para su uso en Brasil.

Se encontraron residuos de **carbofurano**, por ejemplo, un pesticida prohibido en Brasil, en muchas de las muestras recolectadas. Los expertos en salud dicen que el carbofurano causa náuseas, vómitos, diarrea y otros síntomas de intoxicación



aguda. ANVISA prohibió el carbofurano en 2017.

Otro pesticida que se encuentra en las muestras de lechuga es la **atrazina**, que la Unión Europea prohibió en 2003 por su impacto en el embarazo y el desarrollo humano, además de su potencial carcinogénico. Aun así, está permitido en Brasil.

El sitio web de Anvisa distorsiona los resultados y anuncia que "los alimentos vegetales son seguros para el consumo de la población". Pero los números y la ciencia dicen lo contrario.

Sorprendentemente, el estudio también muestra que **los niveles de residuos de pesticidas en estos alimentos están aumentando, no disminuyendo**. Esto corresponde al aumento en el uso de pesticidas reportado en los últimos años por el propio gobierno, así como a un aumento en los casos de intoxicación aguda por pesticidas en aerosol.

El estudio de ANVISA cubre un período antes de que el presidente Jair Bolsonaro asumiera el cargo, pero marca el comienzo de una era de sumisión al poderoso lobby de los agronegocios, en detrimento del medio ambiente.

Durante su primer año como presidente, Bolsonaro redujo la supervisión ambiental, debilitó el trabajo de las agencias ambientales federales y criticó duramente a las organizaciones e individuos que abogan por causas ambientales. Al mismo tiempo que hay cada vez más pruebas de problemas derivados del uso incontrolado de pesticidas, el Gobierno acelera la aprobación de nuevos pesticidas o productos genéricos de sustancias existentes.

Las nuevas reglas aprobadas por ANVISA este año definen el "riesgo de muerte" como el único criterio para clasificar un pesticida como "extremadamente tóxico". Miembros del Congreso y simpatizantes del gobierno de Bolsonaro están presionando por políticas que debiliten aún más la regulación de pesticidas. Hasta este año, el Congreso aún estaba considerando un proyecto de ley que socavaría la aplicación, incluida la reducción del papel de los Ministerios de Medio Ambiente y Salud en la aprobación de pesticidas. El proyecto de ley no ha sido aprobado, pero es posible imaginar que alguien intente presentarlo nuevamente.



El informe de Anvisa se publicó el Día Internacional de los Derechos Humanos. Uno de los derechos celebrados ese día es el derecho a la alimentación, que incluye el derecho a la seguridad alimentaria. Otro es el derecho a la salud, que depende de un sistema de suministro de alimentos decente y bien regulado. Para garantizar estos dos derechos, es necesario garantizar niveles seguros de toxinas, bacterias y otras sustancias que puedan hacer que los alimentos sean nocivos para la salud.

Las grandes plantaciones a escala industrial en Brasil usan pesticidas y herbicidas. La presión para desregular estas sustancias es intensa. Pero los funcionarios y legisladores deben mostrar coraje y exigir normas agrícolas seguras para proteger los derechos a la alimentación y la salud de todos los brasileños.

Maria Laura Canineu es directora de Human Rights Watch para Brasil.